

**Juicio Contencioso Administrativo:
SUA/II/JCA/855/2023**

Actor:

Autoridades Demandadas:

Secretaría de Movilidad del Estado de
Nayarit

***** , Agente de Movilidad

Sentencia Definitiva

Tepic, Nayarit; a once de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS para resolver los autos del Juicio Contencioso Administrativo SUA/II/JCA/855/2023, esta **Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit**¹, a cargo del **Magistrado Numerario Licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez**, procede a emitir sentencia en el juicio promovido por ***** -en delante actor-, en los siguientes términos:

RESULTANDO

- 1. Presentación de la demanda.** El veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se presentó ante Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por el actor, mediante el cual interpuso Juicio Contencioso Administrativo en contra de la **cédula de notificación de infracción folio *******, señalando como autoridades demandadas a la **Secretaría de Movilidad del Estado y a la Agente Vial, *******.
- 2. Admisión de la demanda.** El seis de noviembre de dos mil veintitrés, mediante acuerdo, se admitió la demanda que promovió el actor, asimismo tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de su escrito inicial de demanda, y otorgó la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios, ordenando su cumplimiento sin demora. En ese mismo acto, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de

¹ A quien se referirá en adelante como "Segunda Sala Unitaria Administrativa", salvo mención expresa, en concordancia con el Acuerdo General número TJAN-P-002/2023, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, aprobado en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa SO-09/2023, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, se declara el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y de la Sala Colegiada de Recursos, de este Tribunal de Justicia, a partir del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.

diez días contestaran la demanda y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes.

3. Emplazamiento. El quince de noviembre de dos mil veintitrés, se emplazó a las autoridades demandadas, tanto de los hechos imputados por el actor como de sus conceptos de impugnación, actuación visible a foja 19 del expediente que se actúa.

El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, mediante oficio ***** presentado ante Oficialía de Partes de este Tribunal, el Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, dio cumplimiento a la suspensión de acto impugnado otorgado al actor, remitiendo la licencia de conducir.

4. Contestación de la demanda. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, las autoridades demandadas, presentaron ante Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio ***** , mediante el cual dieron contestación a la demanda de Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por el actor. Motivo por el cual, el quince de diciembre de dos mil veintitrés, mediante acuerdo se tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma, asimismo tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas de su oficio de contestación de demanda y ordenó correr traslado de la misma al actor, a efecto de que se impusiera oportunamente del oficio de contestación y estuviera en aptitud de formular alegatos el día de la audiencia.

5. Celebración de audiencia. El uno de febrero de dos mil veinticuatro, se celebró la audiencia de juicio prevista por el artículo 226 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en la cual se asentó la inasistencia de las partes, no obstante, de haber sido previamente notificadas; se desahogaron las pruebas admitidas, asimismo se declaró precluído el derecho de formular alegatos a las partes. En ese mismo acto, se acordó turnar para resolución el juicio en que se actúa, acorde a lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Sentencia que hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Competencia. Con fundamento en los artículos 116, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 1, 4, fracción XIV, 5, fracción II, 7, fracción II, 19, fracciones III y VII, 33, 37, 39, 40, 41, fracciones II y VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit; 23², 109, 119, 148 y 230 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit³; así como el Acuerdo General No. TJAN-P-02/2023⁴, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa, celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés y el Acuerdo General No. TJAN-P-03/2023⁵, aprobado por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Administrativa, celebrada el trece de octubre de dos mil veintitrés; esta Segunda Sala Unitaria Administrativa es constitucional y legalmente competente para conocer, tramitar y resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, en razón de que se plantea una controversia administrativa entre autoridades de la Administración Pública Estatal y un particular, donde ejerce jurisdicción y competencia este Órgano Jurisdiccional.

Segundo. De las causales de improcedencia o sobreseimiento. De conformidad con los artículos 148⁶ y 230, fracción I⁷ de la Ley de Justicia, las causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden público e interés social, las cuales deben resolverse previamente al estudio del fondo de este Juicio Contencioso Administrativo, las opongan o no las partes, pues son de estudio preferente al tratarse de impedimentos legales que no permiten el estudio del fondo del asunto, por tanto, el juzgador debe

²“Artículo 23.- Las resoluciones serán claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso administrativo.”

³ A quien se referirá en adelante como “Ley de Justicia”.

⁴ Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se determina el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extingue la primera y segunda sala administrativa, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la cual contempla una nueva integración, organización y funcionamiento de este Tribunal.

⁵ Acuerdo General del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, por el que se aprueba la adscripción de los Magistrados que integrarán las Salas Unitarias Administrativas, y a su vez, se establecen las nomenclaturas y el esquema de turnos de los asuntos de su competencia, con motivo del decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

⁶ “Artículo 148. Contestada la demanda, el magistrado instructor examinará el expediente, y si encontrare acreditada claramente alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, a petición de parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por concluido el juicio. En caso de que la causal no resultare clara, ésta se decidirá en la sentencia que resuelva la cuestión planteada.”

⁷ “Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso;....”

primeramente analizarlas, pues de lo contrario se causarían evidentes daños y perjuicios a las partes promoventes.

Por lo anterior, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa, procede analizar de oficio si en el Juicio que se resuelve se configura algún supuesto de los que se enuncian en los artículos 224⁸ y 225⁹ de la Ley de Justicia, toda vez que las autoridades demandadas, a pesar de que en su oficio de contestación de demanda¹⁰ establecieron un apartado denominado *Causales de improcedencia y sobreseimiento*, de la lectura del mismo, se observa que son sólo manifestaciones de defensa, sin que hicieran valer causales de improcedencia y sobreseimiento.

En tal sentido, y de la revisión integral de las constancias que forman el presente Juicio Contencioso Administrativo, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa no aprecia que se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento señaladas en la Ley de Justicia que imposibiliten el pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Tercero. Puntos Controvertidos. De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el acto que se impugna es **la cédula de notificación de infracción con folio número ***** de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés**, acto administrativo que se encuentra debidamente acreditado con la exhibición del citado documento que hace el actor, mismo que se encuentra visible a foja 11 del expediente en que se

⁸ "Artículo 224.- El juicio ante el Tribunal es improcedente:

- I. Contra los actos o las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal;
- II. Contra actos o disposiciones generales del propio Tribunal;
- III. Contra los actos o las disposiciones generales que hayan sido impugnados en un proceso jurisdiccional distinto, siempre que exista sentencia ejecutoriada que decida el fondo del asunto;
- IV. Contra los actos o las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor;
- V. Contra los actos o las disposiciones generales que se hayan consentido expresamente por el actor, mediante manifestaciones escritas de carácter indubitable;
- VI. Contra los actos o las disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por aquellos contra los que no se promueva el juicio en los plazos señalados por esta ley;
- VII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o la disposición general reclamados;
- VIII. Cuando el acto o la disposición general impugnados no puedan surtir efecto alguno, legal o materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, y
- IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal."

⁹ Artículo 225.- Procede el sobreseimiento del juicio:

- I. Cuando el demandante se desista expresamente del juicio;
- II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
- III. Cuando el demandante muera durante el juicio, siempre que el acto o la disposición general impugnados sólo afecten sus derechos estrictamente personales;
- IV. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho claramente las pretensiones del actor, y
- V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución definitiva."

¹⁰ Visible a fojas 25 al 28 del expediente que se actúa.

actúa y por el reconocimiento expreso que de su emisión formula las autoridades demandadas.

Cuarto. Estudio de Fondo. En virtud de que esta Segunda Sala Unitaria Administrativa determinó que no se actualizaron causales de improcedencia que impidieran el estudio de fondo del presente asunto y una vez precisado en el considerando anterior en qué consiste la litis en el juicio que se actúa, se procede al estudio y resolución de los conceptos de impugnación expresados por el actor en su escrito de demanda.

Al efecto, y según el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no es necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer el accionante en su escrito inicial, ni la contestación que produjera al respecto la demandada, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, por lo que en la presente sentencia definitiva no se transcriben por cuestiones de economía procesal y sentido ecológico, y se tienen por reproducidos como si a la letra se insertase.

Cabe hacer la precisión que lo anterior, no implica falta de cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, es decir, sin que sea obstáculo para que en la presente resolución se estudien de manera exhaustiva, todas y cada una de las inconformidades planteadas, como lo prevé el artículo 230, fracción III¹¹ de la Ley de Justicia, se sustenta lo anterior por analogía en la tesis jurisprudencial: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**¹²

Ahora bien, el actor en su escrito de demanda hace valer nueve conceptos de impugnación, visible a fojas 1 al 10 del expediente que se actúa, en los cuales sustancialmente señalan lo siguiente:

1. El acto jurídico administrativo que se impugna agravia sus intereses jurídicos, toda vez que no reúne los requisitos legales de

¹¹ "Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados;"

¹² Tesis: 2a./J. 58/2010, de Jurisprudencia, de la Novena Época, de la Instancia de la Segunda Sala, en materia Común, con registro 164618, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830; de la fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

- fundamentación y motivación que requiere todo acto de autoridad como lo establece la Constitución en su artículo 16, párrafo primero.
2. El agente fue omiso en precisar el nombre exacto del ordenamiento legal de los artículos que señala y que supuestamente infringió, pues el hecho de plasmar una abreviatura, no es suficiente, además los artículos en que funda su actuación corresponden a las actividades del servicio público, y no a un conductor privado, como lo es el actor.
 3. La autoridad está impedida en utilizar abreviaturas al emitir sus actos, máxime si se trata del ordenamiento jurídico donde funda su actuación.
 4. Viola sus derechos fundamentales, ya que, sin ninguna formalidad esencial del procedimiento administrativo o juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, y sin mandamiento escrito de autoridad competente, como lo señala el artículo 16 Constitucional, el oficial se denominó *****, en la cédula de infracción y lo privo de la posesión de su licencia y/o permiso de conducir.
 5. El acto impugnado es ilegal, porque no se siguió el protocolo o el procedimiento administrativo para la detención de un ciudadano, acorde con las reglas que prevé el artículo 364, fracción II del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.
 6. El acto impugnado es ilegal, porque no se siguió el protocolo o el procedimiento administrativo para la detención de un ciudadano, acorde con las reglas que prevé el artículo 364, fracción III del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.
 7. El acto impugnado viola el derecho consagrado por el artículo 16 Constitucional, debido a que el acto que se combate está fundado y motivado indebidamente, porque la demandada sustentó su competencia y atribuciones, invocando preceptos legales no aplicables al caso concreto.
 8. Se advierte que el acto impugnado, se trata de un machote impreso con espacios en blanco que fueron llenados con anterioridad a la firma de notificación, luego entonces, es evidente que la manifestación de voluntad del reconocimiento expreso de la supuesta falta administrativa No tiene certeza de que se haya realizado de manera expresa, espontánea, libre y sin coacción durante la detención.

9. El acto recurrido violenta los principios de certeza y legalidad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque la autoridad demandada emitió dicha cédula sin plasmar su firma.

Por su parte, las autoridades demandadas al momento de contestar la demanda, en su oficio ***** presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés¹³ establecieron en cuanto al único hecho de la demanda, que es falso lo que señala el actor, ya que el agente de movilidad se encontraba en servicio en operativo vial, cuando se percató que el vehículo infraccionado, realizaba su movilidad sin respetar los señalamientos viales, ya que dicha unidad circulaba brincando las boyas poniendo en riegos a los demás conductores, por lo que en ejercicio de sus funciones al percatarse que el conductor había incurrido en una conducta sancionada por la Ley de Movilidad, procedió hacerle saber al conductor la infracción que ha cometido, solicitándole la licencia de conducir y tarjeta de circulación, para proceder al llenado de la cédula de notificación de infracción.

Asimismo, en cuanto al primer concepto de impugnación, mencionaron que la boleta se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que señala el motivo de la misma y narra de manera clara y concisa los hechos.

En cuanto al segundo concepto de impugnación expresaron que es totalmente improcedente lo señalado por el actor, toda vez que el artículo establecido refiere al gafete de operador del servicio público, además que el acta impugnada, si señala los elementos básicos de fundamentación y motivación, por lo que se da cumplimiento al artículo 16 Constitucional, al plasmarse la fecha, hora, datos del vehículo, si es servicio público o privado, el nombre del infractor, tipo de licencia de conducir, lugar donde se cometió la infracción, la violación cometida, el o los artículos violados y artículo donde se contempla la sanción, nombre y firma del agente o autoridad.

Al respecto, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa, por lo que ve al primer concepto de impugnación, en el cual el actor expresa que la cédula de notificación de infracción combatida carece de una debida motivación legal, al no precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que especificaran que en realidad hubiera realizado una conducta contraria a la

¹³ Véase fojas 25 al 28 del expediente que se actúa.

ley, infringiendo lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es fundando había cuenta que, como lo señala el actor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que **funde y motive** la causa legal del procedimiento.

En este mismo sentido, para el caso en concreto y conforme a la ley de la materia, los agentes de policía vial, cuando se percaten de que un conductor cometa una infracción, al transgredir alguna disposición de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit o su reglamento que traiga como consecuencia una sanción, tienen la obligación de proceder conforme lo previsto por el artículo 364 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit¹⁴, por lo que al momento de elaborar la cédula de notificación, conforme a la fracción V del citado ordenamiento legal, deben evitar cualquier acto pueda constituirse en un abuso de autoridad y actuar siempre en apego estricto a la Ley y al Reglamento, cuidando que, los hechos o actos que se le imputen al infractor estén plenamente acreditados, como se estipula los artículos 367 y 368 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, que textualmente dicen lo siguiente:

¹⁴ **Artículo 364. Protocolo de actuación ante conductores.** Cuando un Agente de Movilidad, Supervisor de Movilidad o vial Municipal observe, en el ejercicio de sus funciones, que un conductor ha incurrido en alguna de las conductas sancionadas por la Ley, deberá sujetarse al siguiente procedimiento:

- I. Encenderá los códigos luminosos o sonoros, enviando señales manuales al conductor para que se detenga, en un lugar donde no se ponga en riesgo su integridad física o la del conductor y cuidando de no entorpecer el tráfico vehicular;
- II. Se acercará al vehículo tomando las precauciones necesarias de seguridad y portando el casco, gorra, moscova o el tocado reglamentario y su gafete de identificación a la vista de forma tal que se vea la foto y el nombre del servidor público;
- III. En forma atenta y respetuosa hará saber al conductor del vehículo la infracción que ha cometido citando el artículo de la Ley o del presente reglamento en que se fundamenta la infracción, y lo exhortará a que baje, en caso de ser necesario a efecto de poder hacer la revisión física del vehículo de que se trate;
- IV. Solicitará al conductor la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y póliza o constancia de seguro vial; cuando se trate de operadores de servicio público de transporte, además de lo anterior deberán presentar el gafete correspondiente;
- V. Regresará a su unidad o se retirará prudentemente del vehículo del infractor, para proceder al llenado de la cédula de notificación, lo cual llevará a cabo de tal forma que no se demore el recorrido del conductor;
- VI. Le informará al conductor el monto en Unidad de Medida y Actualización de la sanción impuesta, el descuento que por Ley tiene derecho, así como el recurso de inconformidad y el plazo para interponerlo. Acto continuo le solicitará que firme de recibido la misma, en caso de negativa del conductor, se asentará en la cédula que se negó a firmarla y le entregará el original de la cédula de notificación de infracción al conductor, y en caso de que se niegue a recibirla, quedará a su disposición en la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría, y
- VII. Cuando se esté en el proceso de retirar de circulación vehículos, el propietario o conductor podrá pagar el importe del servicio de grúa antes de que se concrete las maniobras y el arrastre, con el objeto de que otro conductor que el mismo designe y que cumpla con los requisitos que establece la Ley y su estado físico lo permita, pueda llevarse su vehículo, esto cuando el conductor no esté en condiciones de hacerlo, será aplicable en los casos de:
 - a) Estado de abandono del vehículo;
 - b) Que el vehículo estuviera estacionado en lugar prohibido;
 - c) Detectarse al conductor alcohol, drogas, estupefacientes o psicotrópicos, y que sea objeto de arresto incommutable, y
 - d) Operar de acuerdo con los protocolos en materia de alcoholimetría cuando sean concurrentes.

Artículo 367. *Aplicación de Sanciones. En términos del artículo 432 de la Ley las sanciones y medidas de seguridad deberán ser aplicadas por los Policías Viales Estatales, Policías Viales Municipales, agentes de movilidad según corresponda, **bajo un criterio de imparcialidad y responsabilidad, evitando siempre cualquier acto que pueda constituirse en un abuso de autoridad.***

Artículo 368. *Actuación de los agentes. Los Agentes de Movilidad, Supervisores de Movilidad o Policía Vial Municipal, en el ejercicio de sus actividades **deberá actuar siempre en apego estricto a la Ley y al reglamento respectivo, cuidando que los hechos o actos que se le imputen al infractor estén plenamente acreditados.***

Con referencia a lo anterior, es necesario precisar que, la exigencia de **fundamentación** es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, en tanto, la exigencia de **motivación** se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, precisando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, en sustento a lo dicho, son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales:

1. **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.**¹⁵
2. **ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.**¹⁶

De lo anterior, se infiere que la fundamentación y motivación de la cédula de notificación de infracción de tránsito, debe contener los siguientes elementos:

- a) Preceptos legales aplicables;
- b) Relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y
- c) Argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley que tienen aplicación al caso concreto.

Ahora, de la simple revisión de la cédula de notificación de infracción con folio ***** del trece de octubre de dos mil veintitrés¹⁷, se tiene que la fundamentación de la misma, fueron los artículos 131, fracción IV y 432 fracción I inciso a) de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, los cuales estipulan lo siguiente:

¹⁵ Tesis: 260, Aislada, de la Séptima Época, de la Instancia Segunda Sala, en materia Común, con registro 394216, Tomo VI, página 175; de la fuente Apéndice de 1995.

¹⁶ Tesis: I.3o.C.52.K, Aislada, de la Novena Época, de la Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia Común, con registro 184546, Tomo XVII, abril de 2003, página 1050; de la fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

¹⁷ Visible a foja 11 del expediente que se actúa.

Artículo 131. *Para que un vehículo pueda circular en la vía pública deberá:*
IV. *Respetar las señales e indicaciones de tránsito en general, y*

Artículo 432.- *Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que comentan las siguientes infracciones: ...*

I. Se sancionará con multa de hasta cinco veces la UMA por:

a) No se respeten las señales de tránsito o las indicaciones del agente;

Señalando que la infracción cometida fue *“Por no respetar señalamientos de tránsito (brincar boyas)”* y la motivación, razones o circunstancias del hecho que motivó la conducta infractora de la cédula de notificación de infracciones con folio *****, fue el señalamiento de *“Me percate que dicho vehículo no respeta señalamientos de tránsito brincar boyas los cuales son contrarios a lo señalado por los artículos 131 IV LM por lo que le hice del conocimiento de los actos cometidos y que son sancionados por el artículo 432 I A de la Ley de Movilidad, por lo que siguiendo el procedimiento para sancionar a los conductores establecido en el artículo 364 del Reglamento de la Ley de Movilidad, se lleva a cabo el presente acto administrativo”*, asimismo de la lectura de la referida cédula, se aprecia la hora y el lugar en que ocurrieron los hechos, además del nombre del conductor y los datos correspondientes al propietario del vehículo, así como las características del vehículo privado y los datos del agente que emitió la cédula de notificación de infracción.

Sin embargo, y a pesar que la cédula de notificación de infracción goza de la legalidad prevista en el artículo 153 de la Ley de Justicia¹⁸, que implica que los afectados tengan la certeza jurídica y encuadrar las circunstancias especiales suscitadas y las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que además exista adecuación entre los motivos aducidos con la normativa legal considerada infringida; lo que se traduce en no sólo expresar el dispositivo legal aplicable al caso en concreto, sino además las razones y circunstancias que se hayan considerado para estimar que en caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en la norma jurídica; lo cierto es que, hay que considerar el derecho humano a la seguridad jurídica respecto de los actos de las autoridades administrativas, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal y como lo

¹⁸ **Artículo 153.-** Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue, a menos que la negativa implique la afirmación de un hecho.”

sustenta el criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Constitucional y Administrativa; al respecto resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

Novena Época

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Tesis: I.3o.C.52 K

Página: 1050

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.

Motivo por el cual, a juicio de esta Segunda Sala Unitaria Administrativa, considera que le asiste la razón al actor, toda vez que, de la lectura de la cédula de notificación de infracción con folio *****, emitida en fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, a la cual se le otorga valor probatorio en términos del artículo 213 y 218¹⁹ de la Ley de Justicia, se advierte que no cumple con la hipótesis prevista por la tesis invocada, ya que omitió asentar un relato pormenorizado de los hechos, que expresaran las circunstancias especiales y razones particulares por las cuales la autoridad consideró que los mismos se encontraban probados y previstos en la disposición legal señalada como infringida de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, ello

¹⁹ “Artículo 218.- Los documentos públicos hacen prueba plena”

es así, porque la agente vial se limitó a señalar que no respetó los señalamientos viales, al brincar boyas.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit²⁰, se entiende por señales de tránsito, al conjunto integrado de marcas y señales que indican la geometría de las carreteras, vialidades urbanas y sus bifurcaciones, cruces y pasos a nivel, que previenen sobre el potencial peligro en el camino o la naturaleza, regulan el tránsito e indican las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de esas vías públicas, denotan los elementos estructurales que están instalados dentro del derecho de vía, sirviendo de guía a los usuarios a lo largo de sus Itinerario, mismas que se dividen en señalamientos horizontales y verticales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 186 del citado Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, que textualmente dice:

Artículo 138. *Categorías de señales de tránsito. Las señales de tránsito se dividen en las siguientes categorías:*

I. Señalamiento horizontal. *Es el conjunto de marcas consistentes en rayas, símbolos, leyendas o dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas, y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios;*

II. Señalamiento vertical. *Es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras, integradas con leyendas y símbolos. Según su propósito, los señalamientos verticales, pueden ser:*

a) Preventivas: *Son aquellas que tienen por objeto prevenir al usuario algún peligro potencial en el camino o en la naturaleza;*

b) Restrictivas: *Son aquellas que tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad;*

c) Informativas: *Son aquellas que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su recorrido por carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre nombres y ubicación de las poblaciones y de dichas vialidades, lugares de interés, distancias en kilómetros y ciertas recomendaciones que conviene observar;*

d) Turísticas y de servicios: *Son aquellas que tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo, y*

e) Diversas: *Son aquellas que tienen por objeto encauzar y prevenir a los usuarios de las vialidades urbanas, pudiendo ser dispositivos diversos que tienen por propósito indicar la existencia de objetos dentro del derecho de vía y bifurcaciones en la carretera o vialidad urbana, delinear sus características geométricas, así como advertir sobre la existencia de curvas cerradas, entre otras funciones.*

²⁰ **Artículo 137. Señales de tránsito.** Todo conductor de vehículo deberá obedecer las señales de tránsito, entendiéndose por estas al conjunto integrado de marcas y señales que indican la geometría de las carreteras, vialidades urbanas y sus bifurcaciones, cruces y pasos a nivel. Así también previenen sobre el potencial peligro en el camino o la naturaleza, regulan el tránsito e indican las limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de esas vías públicas, denotan los elementos estructurales que están instalados dentro del derecho de vía, sirviendo de guía a los usuarios a lo largo de sus Itinerario.

Aunado a ello, conforme el artículo 145 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit²¹, se considera a las boyas dispositivos para reducir la velocidad y no señalamiento vial, en este entendido, en la boleta impugnada, es notorio que el agente vial fue omisa en especificar correctamente fundamentación aplicada al caso particular, evidenciado con ello que la cédula de notificación de infracciones con folio *****, infringe el derecho a la seguridad jurídica del actor previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con las razones lógicas y jurídicas planteadas, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa, determina que el primer concepto de impugnación vertido por el actor, resulta **fundado y suficiente**, para declarar la invalidez lisa y llana de la cédula de notificación de infracción con número de folio ***** del trece de octubre de dos mil veintitrés, emitida por *****, en su carácter de Agente de la Secretaría de Movilidad del Estado de Nayarit, por configurarse en la especie la causal prevista en la fracción II, del artículo 231²² de la Ley de Justicia. Sirve de apoyo la tesis cuya fuente de localización, rubro y texto, son del tenor literal siguiente:

Novena Época

Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL "PRIMER CIRCUITO."

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XV, Marzo de 2002

Tesis: I.6o.A.33 A

Página: 1350

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por

²¹ **Artículo 145. Instalación de elementos reductores de velocidad.** La instalación de topes de cemento, concreto o integrados a la loza o al asfalto, vibradores o boyas transversalmente a la superficie de rodamiento, sólo deberán colocarse en condiciones excepcionales y únicamente para la protección de peatones, previo dictamen técnico emitido por la secretaría. Dicha instalación solo podrá ser realizada por la Secretaría de Infraestructura o la autoridad municipal competente, por lo que se sancionará por la autoridad competente a los particulares que realicen este acto.

²² **Artículo 231.-** Serán causas de invalidez de los actos impugnados: ...

II. La omisión de los requisitos formales que legalmente deban revestir los actos, cuando ello afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de éstos; ...

su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. **En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.** En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código.” (Énfasis añadido)

En este sentido, y de conformidad con el artículo 230, fracción III²³ de la Ley de Justicia, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa se abstiene de entrar a los demás conceptos de impugnación planteados por el actor, al considerarlo innecesario, en atención a que en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial, cuyos datos de localización y rubro son del tenor siguiente:

Novena Época
Registro: 186983
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XV, Mayo de 2002
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.2o.A. J/2
Página: 928

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO RESULTA FUNDADO ALGUNO DE NATURALEZA PROCEDIMENTAL, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES.

El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación por parte de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de estudiar en primer término aquellas causales de ilegalidad que den lugar a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, y en caso de que ninguna produzca ese resultado, proceder al análisis de aquellos conceptos de nulidad relacionados con la omisión de requisitos formales exigidos por las leyes, y de los vicios del procedimiento que afecten las defensas del promovente. No obstante lo anterior, el examen de todos los puntos controvertidos no debe entenderse en el sentido de que aun cuando resulte fundado un motivo de anulación de naturaleza procedimental, dichos órganos deban pronunciarse respecto de los restantes argumentos, puesto que ello resultaría innecesario si atañen a los actos realizados posteriormente a esa violación, ya que, en todo caso, al subsanarse tales irregularidades por la autoridad, es posible que ésta cambie el sentido de su determinación.”

²³ “Artículo 230. La sentencia que se dicte deberá contener:

III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición general impugnados;”

Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala Unitaria Administrativa;

RESUELVE

Primero. No se advirtieron de oficio causales de improcedencia, por lo que no se sobresee el presente juicio.

Segundo. El actor probó los hechos constitutivos de su acción, de conformidad con las consideraciones vertidas en la presente sentencia.

Tercero. Se declara la invalidez lisa y llana del acto administrativo controvertido, consistente en la cédula de notificación de infracción con número de folio ***** del trece de octubre de dos mil veintitrés, por los motivos vertidos en la presente sentencia.

Cuarto. En su oportunidad, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, sin previo acuerdo, remítase el presente expediente al archivo definitivo, como asunto totalmente concluido.

Notifíquese personalmente al actor y por oficio a las autoridades demandadas.

Así lo resolvió y firma el suscrito Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, Licenciado **Juan Manuel Ochoa Sánchez**, ante la fe de la Secretaria Proyectista, Licenciada **Anabel Merel Díaz**.

“La Suscrita Secretaria Proyectista Anabel Merel Díaz, adscrita a la Segunda Sala Unitaria Administrativa, con fundamento en los artículos 2, fracciones VII, XV, XVI, XX, y XXXVII, 64, 65, 66, 79 y 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 4, fracciones VIII y IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit; Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, y en los Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit; elaboró la versión pública de la sentencia antes identificada, de la que se testan los datos considerados legalmente como información clasificada por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos; información consistente en: Información Clasificada, Información Confidencial e Información Reservada.”